



MANUEL CASADO

Grup Municipal
del PP

REGULARIZACIÓN MASIVA: CONSECUENCIAS EN CORNELLÀ

La anunciada regularización masiva impulsada por el Gobierno de España plantea serias dudas y genera una profunda preocupación en municipios como Cornellà. Una decisión de esta magnitud no puede adoptarse sin una planificación rigurosa, sin diálogo con las administraciones locales y sin tener en cuenta la capacidad real de respuesta de los servicios públicos municipales, que son quienes, en primera línea, deben asumir sus consecuencias.

Cornellà es una ciudad acogedora y comprometida con la convivencia. A lo largo de su historia, ha sabido integrar a personas de distintos orígenes, construyendo un tejido social sólido basado en el esfuerzo compartido. Precisamente por ello, cualquier política migratoria debe asentarse sobre principios de equilibrio, legalidad e integración efectiva. Sin embargo, medidas generalizadas y poco definidas como la anunciada corren el riesgo de producir el efecto contrario: generar desajustes, tensiones y una sobrecarga difícilmente asumible para los servicios públicos.

Nuestra ciudad ya afronta importantes retos en ámbitos clave como la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios sociales. El acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones; los centros sanitarios trabajan con recursos ajustados; las escuelas hacen esfuerzos constantes para garantizar una atención de calidad; y los servicios sociales atienden cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad. A ello se suma la creciente preocupación por la seguridad en algunos barrios, donde la presión sobre los recursos y la falta de planificación pueden agravar la conflictividad y la sensación de inseguridad.

Este contexto exige responsabilidad, planificación y recursos. Incrementar la presión sin una financiación suficiente ni un refuerzo estructural supone un riesgo real de colapso de los servicios públicos y de deterioro de la convivencia. Los ayuntamientos no pueden asumir en solitario el impacto de decisiones tomadas sin contar con ellos.

Además, esta medida genera un agravio comparativo con quienes han seguido los procedimientos legales. El respeto a las normas es un pilar básico de cualquier sociedad democrática, y decisiones como esta pueden debilitar la confianza en las instituciones si no se gestionan con criterios claros y justos.

Desde el Partido Popular de Cornellà defendemos una política migratoria responsable, que combine humanidad con orden y solidaridad con legalidad. Apostamos por una inmigración regulada, vinculada a la capacidad real de acogida, a las necesidades del mercado laboral y a procesos de integración eficaces, acompañada de recursos suficientes, coordinación institucional y un enfoque a largo plazo.

No se trata de rechazar a nadie, sino de hacer las cosas bien. La improvisación solo genera incertidumbre, tensiones sociales y sensación de descontrol.